

Proceso:	Ejecutivo Laboral de Primera Instancia
Ejecutante	María Claudia Narváez Vinueza
Ejecutados	Coomeva Entidad Promotora de Salud y Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A
Radicación n.º	76 001 31 05 019 2021 00337 00

AUTO INTERLOCUTORIO No 821

Cali, siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Decide el despacho el recurso de reposición y en subsidio de apelación formulado por el apoderado de la parte ejecutante en contra de la providencia No 712 del 07 de junio de 2022, notificada en estados el 08 de junio de 2022, en virtud de la cual resolvió negar el mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral de primera instancia, en contra de Coomeva Entidad Promotora de Salud y Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, y en favor de María Claudia Narváez Vinueza. (Archivo 12 ED).

I. ANTECEDENTES.

María Claudia Narváez Vinueza instauró demanda Ejecutiva Laboral de primera instancia en contra de la Coomeva Entidad Promotora de Salud y la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A con el fin de ejecutar una obligación de pago de incapacidades médicas que el ejecutado se

abstuvo de pagar; así como también de los intereses moratorios,

y una obligación de hacer a cargo de la AFP Porvenir S.A,

consistente en realizar la calificación de pérdida de capacidad

laboral de la trabajadora, junto con las costas del proceso.

Como fundamento de su demanda, manifestó que las ejecutadas

Entidad Prestadora de en su condición de Salud

Administradora de Fondo de Pensiones, a la cual se encuentra

afiliada, le adeudan la suma de \$14'277.706 por concepto de

incapacidades médicas, y la suma de \$23'131.958 por concepto

de intereses moratorios comprendidos entre el 19 de mayo de

2020 al 30 de agosto de 2021, obligaciones que se encuentran

contenidas en la sentencia de tutela proferida en primera

instancia por el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de

Control de Garantías de Cali y que fue confirmada en sentencia

de segunda instancia proferida por el Juzgado 05 Penal del

Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, las cuales

constituyen el titulo ejecutivo que se pretende ejecutar.

Mediante Auto Interlocutorio 712 del 7 de junio de 2022, el

despacho al realizar control de legalidad, resolvió negar el

mandamiento de pago por la vía ejecutiva Laboral de Primera

Instancia contra Coomeva Entidad Promotora de Salud y

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir

S.A y en favor de María Claudia Narváez Vinueza, en razón a

que el titulo ejecutivo no cumplía con los requisitos necesarios

para demandar la obligación incorporada en el mismo. (A11 ED)

Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía - Cra. 10 #12-15 Piso 17 Teléfono y WhatsApp: 3187743512.

II. RECURSO DE REPOSICION $\mathbf{E}\mathbf{N}$ **SUBSIDIO**

APELACION.

El apoderado de la parte demandante dentro del término procesal

oportuno formuló recurso de reposición y en subsidio de

apelación en contra de la mentada providencia, manifestando

entre sus argumentos de oposición, que el despacho omitió la

revisión total de los hechos y pruebas que fundamentan y

sustentan las pretensiones de la demanda, que incluyen la

sentencia de primera y segunda instancia, el incidente de

desacato y la sanción interpuesta; a partir de los cuales se

constata la existencia de la obligación y la omisión en el pago de

la misma. Adicional a ello, no se valoraron los certificados de

incapacidades en los cuales se observa el ingreso base de

liquidación y permiten la cuantificación de la obligación insoluta.

Por otro lado, aduce, que, respecto del requisito de exigibilidad,

no se encuentra de acuerdo con la determinación del despacho,

en lo concerniente a que se deba probar cuales incapacidades

han sido pagadas, pues en lo que atañe a los títulos ejecutivos,

con el simple hecho de demostrar que existe una obligación y

manifestar que no ha sido pagada es posible iniciar un proceso

ejecutivo, correspondiéndole a la demandada probar los pagos

realizados. Por lo anterior, solicita se revoque el auto recurrido y

en su lugar se libre mandamiento de pago. (A 21 ED)

Para resolver basten entonces las siguientes

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. III.

Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía - Cra. 10 #12-15 Piso 17

De conformidad con el artículo 63 del CPTSS, el recurso de

reposición solo procede contra los autos interlocutorios y a

efectos del trámite, éste debe "interponerse dentro de los dos días

siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados", por su

parte, el artículo 65 numeral 1 del CPTSS, establece que es objeto

de recurso de apelación el auto que tenga por no contestada la

demanda.

A partir de lo expuesto, habiéndose interpuesto el recurso dentro

del término legal, y luego de revisada en detalle las actuaciones

surtidas dentro del presente asunto, se procede a resolver el

recurso de reposición a cargo del despacho.

Para ello, es necesario enfocarse en los argumentos centrales del

recurrente, que se centran en i) la falta de valoración integral de

los documentos aportados como las sentencias de tutela de

primera y segunda instancia, el desacato, la sanción y el

certificado de incapacidades y ii) la inconformidad respecto de la

exigencia de demostrar los pagos realizados, que no le

corresponde a la ejecutante, sino a la ejecutada.

Para abordar los argumentos esbozados, este despacho volverá a

analizar los requisitos del título a fin de dar tramite al recurso de

reposición interpuesto.

Para ello, cabe rememorar que el título ejecutivo es aquel

"documento público o privado en virtud del cual cabe proceder un

juicio ejecutivo, título emanado de las partes o por decisión judicial

en el cual debe constar una obligación clara, expresa y exigible a

cargo del deudor, idónea para lograr el convencimiento del juez a

Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía - Cra. 10 #12-15 Piso 17

efecto de decretar el mandamiento de ejecutivo correspondiente,

acompañado o no del decreto de medidas cautelares, sea que la

parte demandante lo haya solicitado o se hubiere abstenido de

hacerlo."1

De conformidad con el artículo 422 del CGP, los títulos ejecutivos

son aquellos que contienen una obligación expresa, clara y

exigible, que conste en documentos que provengan del deudor,

de su causante y que constituyan plena prueba contra él o que

provengan de una sentencia de condena proferida por un juez.

Por su parte, el artículo 100 del CPL y de la SS establece que son

exigibles por la vía ejecutiva las obligaciones generadas en una

relación de trabajo, que consten en acto o documento que

provenga del deudor o de su causante o que emane de una

decisión judicial o arbitral firme.

Conforme a las normas en cita el título ejecutivo debe de reunir

condiciones formales y de fondo. Las primeras miran a que se

trate de documento o documentos que conformen unidad

jurídica, que sea o sean auténticos, y que emanen del deudor o

de su causante, de una sentencia de condena proferida por el

juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia

judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley.

Las condiciones de fondo hacen referencia a que de estos

documentos aparezca, a favor del ejecutante o de su causante y

a cargo del ejecutado o del causante, una "obligación clara,

¹ Pineda Rodríguez Alfonso, Los Proceso Civiles, Pág. 362.

Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía - Cra. 10 #12-15 Piso 17

expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple

operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero".

Frente a estos requisitos, ha señalado la doctrina, que por

expresa debe entenderse cuando aparece manifiesta de la

redacción misma del título. En el documento que la contiene debe

ser nítido el crédito - deuda que allí aparece; tiene que estar

expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a

elucubraciones o suposiciones.

"La obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la

redacción misma del contenido del título, sea que consista ésta en un solo documento o en varios que se complementen formando una unidad jurídica. Faltará este requisito cuando se pretenda deducir

la obligación por razonamientos lógicos jurídicos, considerándola

una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta (...)"²

La obligación es clara cuando demás de expresa aparece

determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y

entenderse en un solo sentido.

La obligación es clara cuando además de expresa aparece

determinada en el título en cuanto a su naturaleza y sus elementos (objeto, término o condición y si fuere el caso su valor líquido o liquidable por simple operación aritmética), en tal forma que de su

lectura no quede duda seria respecto a su existencia y sus

características".3

Finalmente, la obligación es exigible cuando puede demandarse

el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo

o condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación

² DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal Tomo III. Vol. II. P. 589.

³ Ibid.

Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía - Cra. 10 #12-15 Piso 17

se debe, a la que debía cumplirse dentro de cierto término ya

vencido, o cuando ocurriera una condición ya acontecida, o para

la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía

hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es

pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición,

previo requerimiento.

"Obligación exigible es la que debía cumplirse dentro de un término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acaecida,

o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento solo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que

es pura y simple por no someterse a plazo ni a condición (C. C.,

arts. 1608 y 1536 a 1542)"

Conforme a los argumentos en referencia, para el caso que nos

ocupa, el despacho en auto interlocutorio 712 del 7 de junio de

2022, estableció que las certificaciones emitidas por Coomeva

EPS, no reconocen en favor del ejecutante suma alguna por

concepto de incapacidades, ni tampoco acreditan su exigencia, y

en ellas no se precisa una suma dineraria clara y precisa que

indique el valor adeudado en los años 2020 y 2021. Conforme a

lo anterior, ante la falta de claridad y reconocimiento expreso de

la obligación, no permite la conformación del título.

Dichos argumentos son reiterados en esta oportunidad, por parte

de este juzgador, toda vez que el titulo ejecutivo a partir del cual

se pretende ejecutar la obligación, no cumple con los requisitos

para demandarse su ejecución, pues no existe la suficiente

claridad ni exigibilidad en las obligaciones de "pago" y de "hacer"

que pretende la parte actora, siendo imposible llevar a cabo la

ejecución aludida

Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía - Cra. 10 #12-15 Piso 17

Aunado a ello, este despacho considera que si lo que se pretende

el actor es ejecutar las sentencias de tutela proferidas por el

Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Control de

Garantías de Cali y el Juzgado 05 Penal del Circuito con

Funciones de Conocimiento de Cali, aquellas no son exigibles en

la justicia ordinaria laboral, toda vez que las mismas fueron

proferidas producto de la actividad jurisdiccional de un juez

constitucional, quien actuó en virtud de un mecanismo

preferente, sumario, subsidiario, inmediato y transitorio

regulado en el articulo 86 de la Constitución Nacional y en el

Decreto 2591 de 1991, que consagra un tramite distinto para

reclamar la exigibilidad de obligaciones contenidas en la

sentencia, concretamente el incidente de desacato contemplado

en el articulo 52 de la norma en comento.

Por otro lado, cabe resaltar que, si bien es cierto, el artículo 422

del Código General del Proceso permite la ejecución de "(...)una

sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier

jurisdicción(...)" es necesario precisar que la naturaleza y

finalidad de un juez constitucional, es amparar derechos

fundamentales que están siendo trasgredidos y requieren de un

tramite preferente para acceder a su protección, por ello dicho

proceso se lleva a cabo en diez (10) días y contempla un incidente

por desacato judicial, propio de dicha jurisdicción constitucional,

que desplaza el proceso ejecutivo, pues en él, puede exigirse el

cumplimiento de un fallo.

De otra parte, en atención a que la ejecutada Coomeva Eps se

encuentra en proceso de liquidación, no es posible ejecutar

obligaciones de dicha entidad, toda vez que, al ser sometida a un

Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía - Cra. 10 #12-15 Piso 17

proceso concursal, el proceso y todas las medidas cautelares

pretendidas deben ponerse en disposición del proceso de

liquidación, siendo infructuoso el proceso en referencia, entonces

lo que corresponde al ejecutante es hacerse parte dentro de la

lista de acreedores de aquella entidad para materializar el pago

de las incapacidades correspondientes.

Conforme a los argumentos antedichos, se confirma la

imposibilidad de abstenerse librar mandamiento de pago a favor

del ejecutante, puesto que el titulo ejecutivo que alude el actor,

no cumple con los requisitos para su ejecución. En este sentido,

el despacho no repondrá la decisión recurrida.

Por otro lado, en vista a que el apoderado judicial de la entidad

recurrente presentó recurso de reposición en subsidio de

apelación, el mismo se concederá en el efecto suspensivo siendo

que este es procedente por cuanto así lo dispone el art. 65 del

CPTSS, por lo tanto, se procederá a remitir las piezas necesarias

para desatar la controversia de autos al Tribunal Superior de

Distrito Judicial- Sala Laboral de esta ciudad, sin necesidad de

expensas a cargo del recurrente, toda vez que en la actualidad

las actuaciones se adelantan de forma digital.

En consecuencia, el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali,

en uso de sus atribuciones Legales y Constitucionales.

RESUELVE

1. No Reponer el auto interlocutorio No. 712 del 7 de junio de

2022 publicado en Estados el 8 de junio de 2022, en virtud de

Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía - Cra. 10 #12-15 Piso 17

la cual se Negó el Mandamiento de Pago por la vía ejecutiva Laboral de Primera Instancia en contra Coomeva Entidad Promotora de Salud y Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A y en favor de María Claudia Narváez Vinueza.

- 2. Conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación contra la providencia a 712 del 7 de junio de 2022 publicado en Estados el 8 de junio de 2022, presentado por parte de María Claudia Narváez Vinueza.
- **3. Publicar** la presente decisión a través de los Estados Electrónicos en el portal Web de la Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020.
- **4. Remitase** copia del expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, para que decida el recurso de apelación.



Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía - Cra. 10 #12-15 Piso 17 Teléfono y WhatsApp: 3187743512.

Email: <u>j19lctocali@cendoj.ramajudicial.gov.co</u>
Micrositio del Juzgado: <u>http://www.t.ly/zFF9</u>